

Por esa razon del juez de Distrito, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del mismo juez, dada en la referida ciudad de San Cristóbal Las Casas, á 28 de Octubre próximo pasado, declarándose: que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. Carlos Thiele, por no existir la violacion de garantías que reclama.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 6 de 1872.—*Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el Presbítero D. Francisco Porras, contra el Ministerio de Hacienda que declaró nacionales los bienes de D. Antonio, D. Mariano y D^a Dolores del Portal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez 3º suplente de Distrito:

En el juicio de amparo que ha intentado el Sr. Presbítero Lic. D. Francisco Porras, contra el Ministerio de Hacienda y crédito público, en diversos lugares del expediente pedí que se le diera entrada al recurso, por no considerar

competente al Juzgado para conocer de él, en virtud de que no se habia promovido contra una autoridad establecida en la capital de la República, que habia mandado ejecutar el acto reclamado á otra perteneciente al Estado de Tlaxcala, cual es la Jefatura de hacienda de aquel lugar. Insistí despues en dicho pedimento, por las razones que se leen en mi escrito de fojas 60 y 80; pero como la Corte Suprema de Justicia haya devuelto los autos para que el recurso se tramitara con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869; y como consecuencia de esto vd. lo mandó abrir á prueba y concluido que ha sido el término se ha reservado en la secretaría para que se alegue por los interesados, con el fin de resolver sobre lo principal; cumpliendo pues con los deberes de mi representacion, paso á ocuparme del negocio en su esencia, aceptando todo aquello que tiene verdadera relacion con el amparo, y haciendo á un lado la multitud de inconducencias promovidas por el referido Presbítero, que ni son favorables ni adversas á los intereses que se discuten.

Bajo este supuesto, diré que el C. Lic. Porras se queja en su ocurso que dió origen á este juicio, contra el Ministerio de Hacienda, porque ha resuelto que son denunciabiles y redimibiles los bienes pertenecientes á la testamentaria de D. Antonio Portal, que consisten en un capital de cuarenta mil setecientos y tantos pesos que se reconoce en la Hacienda de Santa Ana Atoyazolco sita en jurisdiccion de Tlaxcala y el valor de la casa núm. 13 de la calle del costado de San Pedro de esta ciudad, cuya resolucion dictó, segun expresa, de un modo irregular, por no haber estado la denuncia del C. Melquiades Carbajal arreglada á la circular de 9 de Agosto de 1869. De este hecho infiere, que hubo infraccion de los arts. 14, 16 y 27 de nuestro código constitucional.

Esto es lo principal que abraza el pa-

dre en su escrito, que voy á contestar de un modo breve, por las muchísimas atenciones que tengo en razon del ministerio que ejerzo, y que son de mucha mayor importancia por el interes directo de la hacienda pública, y tantos juicios de amparo que se están en la actualidad tramitando en el Juzgado de Distrito, en los que ejercito los derechos que me concede la ley de 20 de Enero de 1869 ya citada.

La queja que se dirige contra el Ministerio es á toda luz injusta, y se ha necesitado toda la mala prevencion del padre promovente para calificar de atentatoria é ilegal la resolucion que dictó con motivo á los bienes de la testamentaria de Portal, que fueron denunciados ante la Gefatura de hacienda de Tlaxcala por el C. Carbajal.

Tal resolucion está perfectamente arreglada á la circular de 9 de Agosto de 1869, pues su art. 6º dice á la letra: "Si de la copia simple de la escritura, de la noticia del registro y de lo que alegaren los interesados, apareciere que el capital denunciado está vivo, se procederá á su cobro ó se otorgará la escritura de subrogacion correspondiente, sin perjuicio de que el responsable haga valer judicialmente las excepciones que tuviere."

Pues bien, aplicándolo al caso tenemos: que habiéndose hecho la denuncia acompañada de la disposicion testamentaria de Portal, en que consta: que dejó, tanto los réditos del capital impuesto en la hacienda de Santa Ana como los productos de la casa de la calle de San Pedro, para que se invirtieran dos terceras partes en misas y una tercera parte en limosnas para los pobres, se cumplió con el precepto de la circular, puesto que los bienes denunciados deben reputarse capitales vivos, segun el tenor del decreto de 9 de Abril de 1862. Sírvasse vd. ver, ciudadano juez, el testimonio certificado de fojas 65 y 66, los de fojas 67 á la 77

y de la 78 y 79, y se persuadirá que no solo se llenó ese requisito, sino todos los demas que exigen todas las leyes relativas á nacionalizacion.

En presencia de esos documentos, ¿dónde están las infracciones constitucionales? ¿Qué, la circular que ha servido de norma al Ministerio para hacer su declaracion, puede llamarse anticonstitucional? Esta circular así como la ley de 10 de Diciembre del mismo año de 1869 y todas sus relativas, han estado en práctica desde el dia de su promulgacion, y hasta ahora nadie las ha calificado de opuestas á nuestra Carta fundamental, á excepcion del padre, que en su agitacion y temor no ha comprendido que lo dispuesto por el Ministerio no es mas que una opinion manifestada á favor del C. Melquiades Carbajal, para que esto, á quien se han subrogado los derechos que el fisco presume tener sobre los bienes de la testamentaria, los haga valer en el juicio respectivo.

Esta opinion está manifestada por medio de la escritura que mandó extender la Gefatura de hacienda de Tlaxcala al denunciante, en la que indudablemente quedaron á salvo las excepciones del padre Porras, para que las aproveché en la vía judicial.

En efecto, ciudadano juez, varias declaraciones se han hecho por el Ministerio, absolutamente iguales á la que ha recaído en el negocio del C. Porras, y no han tenido ningun resultado. Podria citar casos que no serian desconocidos del personal del Juzgado, en que no obstante que los denunciantes se han presentado demandando ejecutivamente un capital redimido, con su escritura en forma, no han obtenido, á consecuencia de que el juez competente lo ha calificado de propiedad particular. Pues si existen estos ejemplos que el padre no debería ignorar, ¿á qué fin el haber interpuesto el recurso presente?

Estoy cierto que al promoverlo ha

creído, que la expresada resolución del Ministerio le iba á despojar de un modo violento de los derechos que le asisten á los bienes denunciados, sin ser vencido antes en juicio; y cree además, que si el amparo se decreta á su favor, cosa que no ha de ser, le va á otorgar un robustísimo derecho para no ser perseguido por esos bienes. Se equivoca, ciudadano juez, porque aunque esté amparado doscientas ocasiones, no ha de poder rehusar el llamamiento que el C. Carbajal le haga ante los Tribunales, con el apoyo del ministerio fiscal, que defiende los intereses de la nación.

Si el Sr. Porras no se hubiera dejado llevar de la violencia de su carácter y se hubiera detenido en pensar cuáles son los resultados de un juicio de amparo para su caso, no habría perdido tanto tiempo en formar un expediente voluminoso con el que ha fatigado por demas su atención, la del juez propietario del Distrito, la de los tres suplentes y la muy respetable de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco habría invertido la cantidad de dinero que en certificaciones y papel sellado ha tirado inútilmente. Tarde se ha de persuadir de lo que ha hecho, y entonces, muy á su despecho, tendrá que confesar que el Ministerio, contra el que dice calumnias indignas, no ha dado motivo para la interposición del recurso.

No debo extenderme mas en estas consideraciones; con lo expuesto basta para probar, que el Ministerio de Hacienda al declarar denunciabiles y redimibles los bienes de la testamentaría que están encomendados á la administración del padre Porras, se ha circunscrito á la ley y en nada perjudica los derechos de los responsables.

De contrario se asienta que la disposición del Ministerio es irregular, porque la denuncia del C. Carbajal es mala y no está arreglada á la circular varias veces mencionada de 9 de Agosto. Para

destruir estos conceptos, reproduzco y hago mias cuantas razones se han alegado en el escrito, cuya lectura he recomendado al Juzgado, que es del denunciante y se registra á fojas 67 y 77 del expediente; en él se explican muy bien los términos en que se hizo y las disposiciones legales en que se fundó. Este documento destruye cuantas argucias ha inventado el padre para desconcepar la operación.

Sobre aquello de que se queja el promovente, de que por la disposición del Ministerio se le ha despojado, como comisario, de la facultad para testar y que se han hecho nulos los comunicados secretos que Portal le dejó de palabra y por escrito, debo llamar únicamente la atención de vd., ciudadano juez, de que sin embargo de la declaración, todo lo ha puesto en práctica, pues ha testado y ha hecho el uso que mas le ha convenido de los tales comunicados. Circunstancias son estas que existen en el cuaderno de pruebas que ha rendido el padre, y á ellas me refiero para justificar mis asertos.

De aquel cúmulo de documentos de que se compone dicho cuaderno que formó el interesado sin llenar los requisitos de la ley, porque ni ratificadas están las firmas de los escribanos en ciertas certificaciones, ni siquiera hago mención de ellos, porque probarán cuanto se quiera menos el que haya habido violación de garantías con la determinación del ministerio.

He concluido, ciudadano juez; por los fundamentos y consideraciones que tengo manifestadas, con el carácter de Promotor fiscal, pido á vd. se sirva declarar: que no procede el recurso intentado por el Sr. Presbítero Porras, contra el acto del Ministerio de Hacienda que determinó, que eran redimibles y denunciabiles los bienes de la testamentaría del Sr. D. Antonio Portal, denunciabiles ante la Jefatura de hacienda de Tlaxcala,

por el C. Melquiades Carbajal; y que debe aplicársele una multa de quinientos pesos con arreglo al art. 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, porque se le niega el amparo por falta de motivo para decretarlo.

Zaragoza, Octubre 22 de 1872.—*Eugenio Sanchez.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Puebla, 31 de Octubre de 1872.—Visto el ocurso del Presbítero Lic. D. Francisco Poiras, que en su calidad de albacea testamentario de D. Antonio del Portal, y como heredero de los hermanos de este, D. Mariano y Dª Dolores, solicita se le ampare contra la resolución dada por el Ministerio de Hacienda el 27 de Abril del presente año (fojas 79) en que declaró nacionalizados los bienes de las testamentarias del cargo del mismo Presbítero, y cuyos bienes figuran en el concurso de D. Bartolomé del Portal: visto el informe del C. Ministro, así como todos los atestados que acompaña, inclusa la declaración que ha motivado el amparo (fojas 61 á la 78): las copias simples de las escrituras en que se hicieron constar las operaciones de redención, por el capital de cuarenta mil pesos y sus réditos que se reconocen en la hacienda nombrada Santa-Ana Atoyotzolco, y por once mil quinientos pesos, valor de la casa número 13, ubicada en esta ciudad, en la calle de San Pedro (fojas 14 á la 58): vistos los pedimentos fiscales relativos á que no se diese entrada al recurso, y á la incompetencia de este Juzgado para conocer de él: el auto de 23 de Julio (fojas 83) en que el C. juez propietario se declaró incompetente: la resolución de la Suprema Corte de Justicia (fojas 95) en que previno que este mismo Juzgado sustanciase el recurso con arreglo á la ley

Tomo III.—Parte II.

de 20 de Enero de 1869: el auto del mismo C. juez, que, á virtud de esa respetable determinación, se avocó de nuevo el conocimiento y previno la prosecución del juicio, mandando dar traslado al C. Promotor: vistas las pruebas rendidas por el actor; lo alegado por este y por la parte Fiscal, con todo lo demás que ha debido tenerse presente y ver convino.

Considerando: que para fundar la legitimidad de esta resolución, se hace preciso examinar previamente la cuestión sobre competencia de este Juzgado, para conocer y decidir el presente recurso, una vez que ella se suscitó, no solo por el C. Ministro de Hacienda, sino por el Promotor, cuyos funcionarios han entendido que el conocimiento del negocio era del resorte del C. juez de Distrito de Tlaxcala:

Que respecto de este punto, bastaría, para apoyar la jurisdicción de este Juzgado, lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia con fecha 28 de Agosto último, la que, á pesar de la declaración del C. juez propietario (fojas 83), le previno que sustanciase el recurso, no de competencia sino de amparo:

Que aun sin la prevención de la Suprema Corte, el Juzgado de Tlaxcala no habría sido el competente, aun cuando, como se dice, en esa ciudad se hiciera la denuncia, se formalizaran las operaciones de redención, y se extendieran las escrituras, pues ni esa denuncia hubiera surtido sus efectos, ni esas operaciones se hubieran practicado sin la resolución del C. Ministro de Hacienda, que declaró que los bienes denunciados eran nacionales; y el otorgamiento de las escrituras, no fué sino el hecho de reducir á las formas de instrumento público, la trasmisión de derechos en favor del denunciante, cuya subrogación derivó su origen de lo declarado por el expresado C. Ministro:

Que tampoco sería de la competencia

del Juzgado de México el conocimiento del recurso, á pesar de que allí se hiciera la declaracion que ha dado mérito á la queja, pues si bien con esa declaracion se violaron las garantías constitucionales que el actor cree vulneradas, la providencia ha venido á hacerse efectiva en esta ciudad, en la que están radicados el concurso y las testamentarias de los hermanos Portal, á que pertenecian los bienes denunciados, en ella tambien existen los herederos ó interesados, siendo, por lo mismo, el juez nato el de la residencia de la persona ó personas, cuyas garantías se violan; fundándose este concepto en los casos ejecutoriados de igual naturaleza, confirmados por la Suprema Corte, como lo son los que se refieren en las sentencias de 15 de Setiembre de 1868 y 5 de Enero de 1870, insertas en el "Derecho" (tomos 2º y 4º):

Que, sobre todo, es bien expreso el art. 3º de la ley de 20 de Enero de 1869, que constituye juez de 1ª instancia "el de Distrito de la demarcacion en que se ejecute ó trate de ejecutarse la ley ó acto que motive el recurso de amparo;" y en esta ciudad se ha tratado de hacer efectiva la declaracion del C. Ministro, puesto que aquí (fojas 16 enadeno de pruebas) se ha hecho la notificacion al Síndico del concurso para que reconozca como parte en él al denunciante, C. Melquiades Carbajal, por lo que respecta al capital redimido, y aquí tambien, se han formalizado gestiones para hacer entrar al mismo denunciante en posesion de la casa de la calle de San Pedro, todo lo que justifica la competencia y jurisdiccion de este Juzgado para conocer y decidir el recurso interpuesto por el Presbítero D. Francisco Porras:

Considerando: que en órden á la resolucion del C. Ministro de Hacienda, que declaró, que eran nacionales, y por lo mismo redimibles, los bienes de la testamentaria de Portal, denunciados por el

C. Melquiades Carbajal, la solicitud de amparo se funda en la violacion de las garantías individuales, otorgadas por el Código fundamental, en sus artículos 14, 16 y 27, en cuya virtud "*nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley:*" "*nadie puede ser molestado en su persona y posesiones, sino por mandamiento de autoridad competente. . . .*" "*la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento. . . .*"

Que en cuanto á la garantía consignada en el art. 14 de la Carta constitucional, es incuestionable que se violó con la declaracion del C. Ministro de Hacienda, porque contradicha, como lo fué por el interesado, la denuncia del C. Carbajal, haciéndose en la oposicion referencias á hechos que demandaban esclarecimiento y discusion en la esfera judicial, anunciándose cuestiones legales que exigian decision previa, lejos de sujetar la disputa iniciada á la resolucion del Juzgado de Distrito respectivo, el mismo C. Ministro funcionó como juez; y sin mas apoyo que el relato subrepticio del denunciante, sin mas datos que los incompletos exhibidos por este, sin mas que la oposicion sucinta del interesado, *resolvió* el caso, declarando nacionales los bienes objeto de la denuncia, ejerciendo así facultades que son propias y exclusivas de los tribunales, lo que pugna con el principio constitucional que establece la independencia de los poderes, tocando exclusivamente al judicial la aplicacion de las leyes; y en materia de nacionalizacion, las disputas sobre denuncias, preferencia de derechos, propiedad de bienes, etc. corresponde decidir las á los tribunales federales, segun lo dispuesto en el art. 23 del reglamento de 5 de Febrero de 1861:

Que nada signifícan, y, por lo mismo,

no son de atenderse las razones que en apoyo de la declaracion del C. Ministro, se aducen, tanto por el denunciante, como en el informe de la mesa respectiva, y aun en el último pedimento fiscal sobre que la denuncia se formalizó con arreglo á la ley de 9 de Agosto de 1869, que aquella declaracion no es mas que la opinion del C. Ministro, la que no envuelve violacion de las garantías; que el caso no ha quedado definitivamente resuelto con aquella declaracion, puesto que aun puede iniciarse ante los Tribunales el juicio respectivo que debió entablarse en vez del amparo, y no son de atenderse, porque á mas de que no es exacto que la denuncia esté apoyada en los atestados que exige aquella ley, pues es absurdo en derecho el concepto de que un poder para testar deba reputarse como *escritura de imposicion*, ni como la constancia de *estar vivo el registro*, que son los documentos indispensables para hacer la subrogacion en lugar del erario; aparte de que no es una simple opinion el acto de declarar oficialmente que pertenecen al fisco federal determinados bienes, hay tambien la constancia, de que en fuerza de esa declaracion, se transmitieron derechos, se consumaron redenciones de los mismos bienes y se dictan providencias para ejecutar lo determinado por el C. Ministro:

Que no es fundada la idea que se ha vertido por el C. Promotor, sobre que el recurso de amparo solo puede promoverse, cuando el quejoso ya no puede ejercitar otras acciones, pues semejante restriccion no se encuentra establecida, ni en la ley fundamental ni en la reglamentaria de 20 de Enero de 1869:

Que si bien es cierto que la citada ley de 9 de Agosto, permite el otorgamiento de subrogacion y aunque se cobre el capital, sin perjuicio de que el responsable haga valer judicialmente las excepciones que tuviere, ella supone, por una

parte, el caso en que tanto por la *escritura de la imposicion*, como por la noticia del registro, conste que el *capital denunciado esté vivo*, lo que no se justificó respecto de los bienes de que se trata, y por otra, supone tambien, á efecto de dar entrada á las excepciones, que solo haya habido simplemente la trasmision de derechos, sin violacion de garantías, y sin que esa trasmision se haya hecho avanzar hasta el punto de darse posesion de los bienes denunciados al redentor, con infraccion del precepto constitucional:

Que respecto de la violacion de las garantías otorgadas en los arts. 16 y 27 de la ley constitucional, esa violacion es bastante manifiesta en lo resuelto por el Ministerio de Hacienda, desde el momento en que enajenó al denunciante la casa número 13 de la calle del Costado de San Pedro, y los cuarenta mil pesos que reconoce, como parte del precio en que compró la finca de Santa-Ana Atoyotzoleo, mandándose consumir las operaciones de redencion, y otorgándose títulos, en cuya virtud el denunciante ha quedado en posesion de aquel cuantioso capital, consolidando así el dominio, haciéndose valer ademas aquellos títulos, hasta el grado de haberse notificado al Síndico del concurso que reconociese al C. Melquiades Carbajal como *dueño* del capital denunciado [fojas 15, cuaderno de pruebas], procediéndose asimismo á ejecutar la providencia que ha tenido por objeto dar al C. Carbajal posesion de la referida casa [fojas 17 y 18 id.], todo lo que evidentemente importa un ataque á la propiedad:

Que ese ataque, base esencial del amparo, lo funda el actor, en que tanto el capital, como la casa denunciados y redimidos, son de *propiedad particular*, como realmente lo ha comprobado de una manera irrefragable no solo con el testamento otorgado en virtud del poder que

le confirió D. Antonio del Portal, no solo con los comunicados que este dejó á su comisario [fojas de la 19 á la 27, cuaderno de pruebas], sino con los atestados de fojas 12, 13, 14, 28, 29 y 30:

Que tanto de aquel instrumento como de aquellos atestados, consta que el capital de cuarenta mil pesos que denunció el C. Carbajal con la dote de D^a Ana Joaquina Gonzalez de Silva, cuya dote, habiendo ingresado á la sociedad conyugal, fué comprendida en el concurso á bienes de D. Bartolomé del Portal, marido de aquella señora, por cuyo fallecimiento heredaron la misma dote sus hijos D. Mariano, doña Dolores y D. Antonio del Portal, los que sucesivamente, al morir, han dispuesto de la parte correspondiente al capital, legándola en herencia á determinadas personas, pues el referido D. Mariano instituyó por heredero de su cuota al Presbítero D. José Francisco Porras, á quien asimismo doña Dolores dejó doce mil pesos de lo que le pertenecía, quedando, en consecuencia, únicamente la tercera parte de aquella dote á D. Antonio Portal, quien en los comunicados respectivos [fojas 19] estimó apenas esa parte en *quince mil pesos*:

Que la denuncia, falsa en su base, provocó una resolución que comprendió todo el haber dotal, esto es, se declaró, por solo el poder para testar de D. Antonio del Portal, que eran nacionales los bienes pertenecientes á D. Antonio y á doña Dolores del Portal, que el denunciante no justificó que fuesen destinados á *objetos piadosos*, y antes bien, consta que hoy pertenecen, sin restriccion, á sus herederos y legatarios, haciéndose de ese modo extensiva la resolución del Ministerio de Hacienda, á bienes que fueron y son de particulares, cuya propiedad se ha violado:

Que para que la denuncia descansara en fundamentos, siquiera fuese aparentemente legales, era necesario, cuando

menos, que el C. Melquiades Carbajal hubiera justificado que las dos terceras partes de la dote, que respectivamente correspondieron á D. Mariano y á doña Dolores Portal, habían pasado en herencia por su muerte á su hermano D. Antonio, y que este había reasumido el dominio de todo el haber materno, y era necesario tambien, que hubiera demostrado, que el mismo D. Antonio, en el poder para testar conferido á su albacea, había dispuesto de todos los cuarenta mil pesos, en favor de objetos piadosos, circunstancias que en sentido contrario, están comprobadas en lo actuado:

Que relativamente á la parte de aquella dote y del haber paterno que correspondían á D. Antonio Portal, esos bienes no han podido ser declarados denunciabiles para hacerlos entrar íntegros al dominio de la nación, sin ocupar la propiedad que respectivamente tienen apoyada en título legítimo el C. Juan Blanca, legatario del quinto de esos bienes (fojas 26 vuelta pruebas); los sucesores de D. José María Maza, á quien la testamentaria de Portal debe dos mil setecientos pesos (fojas 26 frente); el fondo de sustraccion secundaria segun la liquidacion de fojas 29; los accionistas por costas en la testamentaria de Portal, y por fin el Hospicio de pobres de esta capital, cuyos derechos, así como los de todos los legatarios están representados por el albacea supuesta la proindivision de las testamentarias:

Que, por otra parte, ninguna de esas testamentarias de los hermanos Portal, está liquidada, ni lo está tampoco el concurso del padre de ellos, en cuyo caso mal podría servir de base para nacionalizar los bienes, una denuncia que, lo mismo que la declaracion del Ministerio de Hacienda, afecta vivamente los derechos de los acreedores:

Que aun reputando liquidada la testamentaria de D. Antonio del Portal, el caudal de este, apenas ascendia (fo-

jas 29 de las pruebas) á cien mil ochocientos setenta y nueve pesos, por la parte de la dote de la Sra. Silva, una vez que por cuenta de esa parte (\$ 13,807) había recibido cinco mil novecientos treinta y ocho pesos:

Que sobre todas esas consideraciones, viene la de que, aun suponiendo que todo el capital denunciado hubiera pertenecido á D. Antonio del Portal, esos bienes, por solo la circunstancia de haberse mandado aplicar despues del fallecimiento del último de los usufructuarios, á misas por su alma, por las de sus padres y hermanos, y una parte al Hospital de pobres de esta ciudad, no han podido, conforme al tenor y espíritu de las leyes de Reforma, nacionalizarse por el C. Ministro de Hacienda:

Que la disposicion de 9 de Abril de 1862, que se ha invocado por el denunciante y que sirvió de fundamento á la declaracion, de ningun modo es aplicable al caso de la denuncia, en razon de que si aquella ley permitió denunciar y previno redimir los capitales dejados en testamento para *objetos piadosos*, fué porque se referia á aquellos que conforme á la voluntad del testador, no solo habian de imponerse ó fundarse bajo los auspicios de la autoridad eclesiástica, sino que debian quedar sujetos á su administracion, puesto que aquella misma ley en armonía con la que nacionalizó en 1859, los bienes que hasta esa época administraba el clero secular y regular, quiso que los capitales que igualmente habian de administrarse por disposicion del testador, ó estancarse en la administracion eclesiástica, quedasen comprendidos en la nacionalizacion:

Que no existiendo *fundacion* en el sentido canónico de la palabra, ni prevencion del testador para que se formalizara, la ley de Abril no puede hacerse extensiva á disposiciones testamentarias, hechas en favor de obras buenas de piedad y de personas desvalidas ó

miserables, pues al darle mayor latitud se desnaturalizarian los principios que precedieron á la formacion de las leyes de Reforma, que solo tuvieron por objeto hacer entrar al dominio de la nacion los bienes que estaban, ó podian quedar bajo la administracion del Clero, pero nunca los de particulares, fuera cual fuere su aplicacion, aunque fuese piadosa, siempre que ella no contrarie el gran fin de la nacionalizacion; y se hierian tambien, los principios constitucionales que garantizan la propiedad particular, cuyos conceptos se corroboran no solo con el tenor y espíritu de las mismas leyes de Reforma, sino con los fundamentos que apoyan la resolucion que en caso exactamente igual pronunció la Suprema Corte el 10 de Agosto de 1869, en el amparo concedido al albacea de doña Cayetana Chavarria, cuya resolucion se registró en la página 118 del tit. 3º del *Derecho*:

Por todo lo expuesto, y con fundamento del art. 101 de la Constitucion, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al Presbítero D. Francisco Porras, contra la resolucion del C. Ministro de Hacienda de 27 de Abril último, que declaró nacionales, y por lo mismo denunciabiles y redimibles, los bienes de las testamentarias de D. Mariano, doña Dolores y D. Antonio del Portal. Hágase saber, y publicándose esta resolucion en el "Periódico oficial" del Estado y en el "Semanario Judicial," elévense estos autos á la Suprema Corte para su revision.

Lo mandó y firmó el C. Lic. José de Jesus López, juez 3º suplente de Distrito.—Doy fé.—*José de Jesus López.*—Ante mí.—*Antonio García Mosqueira.*

Y cumpliendo con lo mandado por el señor juez, en la inserta resolucion, pongo la presente para su publicacion en el "Semanario Judicial," en Puebla á 7 de

Noviembre de 1872.—*Antonio García Mozqueira*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 3 de 1872.—Visto el juicio de amparo que con fecha 21 de Mayo último, promovió en Puebla ante el juez de Distrito del Estado del mismo nombre, el Presbítero José Francisco Porrás, en calidad de Comisario y albacea del finado D. José Antonio Portal, contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito público, expedida á 27 de Abril del corriente año, declarando denunciabiles y redimibles los bienes que de la testamentaria de dicho Portal, denunció ante la Jefatura de Hacienda de Tlaxcala, el C. Melquiades Carbajal; con cuya resolución sostiene el promotor que se han violado en sus representados las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución de la República mexicana. Visto el informe con justificación rendido por el Ministro de Hacienda y Crédito público, autoridad que el quejoso ha presentado como responsable del acto que reclama; las pruebas aducidas: los pedimentos del Promotor fiscal y cuanto mas consta de autos y verconvino.

Considerando: que la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito público, contra la cual se ha pedido el amparo, solo expresa que son denunciabiles y redimibles en la forma legal los bienes dejados por D. Antonio Portal, denunciados por el C. Melquiades Carbajal, ante la Jefatura de Hacienda de Tlaxcala, continuando la parte dejada á los pobres aplicada á su objeto, sin ingerirse en decidir sobre los derechos que alega el Presbítero Porrás, que le asisten en aquellos bienes: que tal resolución siendo conforme á las leyes de

reforma que invoca el Ministerio dicho, por tratarse de capitales cuyos productos se han destinado á objetos de piedad y de beneficencia, no importa violencia alguna á los derechos alegados por el Presbítero Porrás, que produzca la violación de garantías que ha reclamado, siendo de decidirse con arreglo á las leyes sobre los derechos aducidos contra la operación del denunciante en juicio correspondiente y no en el recurso de amparo, por manera que denegado este al Presbítero quejoso, esta denegación no prejuzga los derechos de los interesados que deben ventilarse ante los Tribunales, sobre posesión y propiedad de los bienes á que se refiere.

Por las consideraciones asentadas y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: 1º: Es de revocarse y se revoca la sentencia que pronunció en Puebla, el juez 3º suplente de Distrito del Estado de ese nombre, á 31 de Octubre próximo pasado declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege al Presbítero D. Francisco Porrás, contra la resolución del C. Ministro de Hacienda de 27 de Abril último, que declaró nacionales y por lo mismo denunciabiles y redimibles, los bienes de las testamentarias de D. Mariano, doña Dolores y D. Antonio del Portal. 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege á dicho Presbítero Porrás, contra la resolución mencionada, por la cual se expresa que son denunciabiles y redimibles los bienes de la testamentaria de D. Antonio Portal, denunciados por el C. Melquiades Carbajal ante la Jefatura de Hacienda de Tlaxcala.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo de-

cretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados--Unidos mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 4 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido por María Salomé, en representacion de su hijo Manuel Salgado, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, contra la Gefatura política del Distrito de Cuernavaca, por consignacion hecha de Salgado al servicio de las armas.

PRIMER PEDIMENTO FISCAL.

El Promotor Fiscal dice: que María Salomé presentó escrito á este Juzgado el 17 del actual, quejándose de haberse violado en la persona de su hijo Manuel Salgado las garantías que otorga el Pacto federal, con el hecho de haber sido tomado de leva y remitido de Alpuyeca el dia 11 á la Gefatura política de este Distrito, quien lo puso á disposicion del O. coronel Ignacio Mendez Mora, gefe encargado de recibir en el Estado los reemplazos que se destinan al ejército federal y pidió la suspension del acto reclamado y el amparo de garantías, alegando que Salgado, como hijo de viuda á quien mantiene con su trabajo personal, así como á otros seis hermanos menores, está comprendido en una de las excepciones marcadas por la ley de 7 de Mayo de este año, que prorogó las fa-

cultades extraordinarias concedidas al ejecutivo de la Federacion.

Pedido el informe á la autoridad ejecutora y no recibido en el término de la ley, el Juzgado, considerando el caso como de urgencia notoria, decretó la suspension por auto del 18, conforme á la 2ª parte del art. 5º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

El 19 se recibió el informe de la Gefatura política, del que resulta: que Salgado fué remitido por el presidente municipal de Sochitepec, como reemplazo de los que pidió esta Gefatura para cubrir su contingente al ejército federal y venido que fué se le consignó al depósito de reemplazos, en cumplimiento de la circular núm. 3 del gobierno del Estado expedida en 22 del próximo pasado Enero.

Por auto del mismo dia se mandaron pasar estos autos en traslado al que suscribe, con arreglo al art. 5º de la citada ley de 20 de Enero.

La segunda parte del art. 6 de esta ley establece, que de la resolucion en que se otorga ó desecha la suspension del acto reclamado, no queda mas recurso que el de responsabilidad, y otorgada ya la que solicitó el quejoso en este recurso nada puedo decir sobre ese punto irrevocablemente resuelto, y paso á ocuparme de lo principal, sin embargo de que no existe aun en estos autos el informe con justificacion de la autoridad ejecutora.

En el escrito de queja no hay la referencia al artículo constitucional que otorga la garantía violada por el acto reclamado; pero por la relacion de hechos que en él se hace, está perfectamente marcado que el hecho que motiva la infraccion de garantías es la consignacion al servicio de las armas, que contra su voluntad hizo de Salgado el presidente municipal de Sochi. El art. 5º de la Constitucion de la República, establece: que nadie pue-